

10-20-RA-SCA

me

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**; San Salvador, a las once horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veinte.

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO, PARTES Y SENTENCIA IMPUGNADA.**

El presente recurso de apelación ha sido interpuesto por el **Ministerio de la Defensa Nacional** –en adelante, MDN–, por medio de su apoderado general judicial, licenciado Carlos Edgardo Salgado Herrarte, quien posteriormente fue sustituido por el licenciado Víctor Enrique Amaya Chinchilla; *contra la sentencia* emitida por la Cámara de lo Contencioso Administrativo con residencia en \_\_\_\_\_ a, departamento de \_\_\_\_\_ –en adelante, la Cámara–, a las ocho horas con veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en el proceso contencioso administrativo clasificado con la referencia interna 37-PC-07-2018 (NUE 00068-18-ST-COPC-CAM), mediante la cual falló **DESESTIMAR** la pretensión planteada por el MDN contra el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública –en lo sucesivo, IAIP–, debido a no haberse comprobado los motivos de ilegalidad alegados en primera instancia respecto al acto administrativo impugnado consistente en la resolución emitida por el IAIP a las diez horas con treinta y seis minutos del diez de abril de dos mil dieciocho, en el procedimiento administrativo con referencia 324-A-2017 mediante la cual: (a) revocó la resolución de improponibilidad emitida por el Oficial de Información del MDN el seis de noviembre de dos mil diecisiete; (b) ordenó al MDN abstenerse de imponer límites al derecho de acceso a la información pública no contemplados por la ley, tramitando las solicitudes de información que se le presenten sin discriminaciones ni obstáculos de cualquier índole; (c) ordenó al MDN que proporcionara al señor David Ernesto Pérez Domínguez la información solicitada y objeto de acceso en dicho caso, consistente en «...1) copias de todas las facturas y contratos por servicios de alimentación que el [MDN] compró desde enero de 2012 hasta septiembre de 2017. Detallar nombres de los proveedores de menús de servicios de alimentación: 2) copias de todas las facturas pagadas con fondos circulantes y caja chica del Ministerio de Defensa, desde enero de dos mil doce hasta septiembre de dos mil diecisiete» [folio 12 fiente]; y (d) ordenó al MDN que remitiera informe de cumplimiento a dicha resolución.

Han intervenido en esta instancia la autoridad recurrente, en la forma indicada; el IAIP, como autoridad recurrida por medio de su apoderado general judicial, licenciado René Francisco Valiente Araujo; y la licenciada Karla Mileny Rivas Morales, en calidad de agente auxiliar delegada por el Fiscal General de la República. El señor David Ernesto Pérez Domínguez, tercero beneficiado con el acto administrativo impugnado en primera instancia, no ha comparecido en esta instancia, pese habersele notificado en legal forma todas las resoluciones dictadas por esta Sala.

## **VISTOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:**

### **I. ANTECEDENTES.**

1. En el expediente de primera instancia constan las actuaciones procesales de las partes y de las magistradas, así como las etapas procesales que culminaron en la sentencia ahora impugnada. Conforme a lo regulado en el artículo 238 del Código Procesal Civil y Mercantil –CPCM– [normativa de aplicación supletoria al presente caso, en virtud del artículo 123 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa –en adelante, LJCA–], esta Sala realizó el examen de la regularidad jurídica de las actuaciones procesales, observando que durante el desarrollo del proceso en primera instancia no existen nulidades insubsanables que deban ser declaradas.

2. En resolución de las once horas con treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte [folios 26 al 29] se admitió el recurso de apelación interpuesto por el MDN, y se confirió audiencia a las partes, al tercero beneficiado con el acto administrativo en primera instancia y a la representación fiscal, a efecto que manifestaran si contaba con las herramientas técnicas necesarias para comparecer a la audiencia a celebrarse en modalidad virtual.

3. En resolución de las once horas con treinta y dos minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte [folios 61 y 62], se convocó a las partes, al tercero beneficiado con el acto administrativo en primera instancia y a la representación fiscal para la celebración de la audiencia de apelación, en modalidad virtual.

4. Según consta en acta de folios 98 y 99, a las nueve horas con veintiún minutos del nueve de septiembre de dos mil veinte se celebró la audiencia antes mencionada; y, habiendo escuchado a la impetrante, partes apeladas y la opinión técnica de la Fiscalía General de la República, el presente recurso quedó listo para dictar la sentencia en el plazo de veinte días hábiles, de conformidad a lo establecido en el artículo 117 inciso cuarto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa [en adelante LJCA].

### **II. MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN PLANTEADOS EN EL RECURSO.**

En el recurso presentado y en la audiencia respectiva, la parte recurrente señaló los siguientes motivos de impugnación de la sentencia hoy apelada: (A) contravención a los principios de legalidad y seguridad jurídica con relación al artículo 74 letra c) de la Ley de Acceso a la Información Pública –en adelante, LAIP–, por la incorrecta interpretación hecha por la Cámara del precedente emitido por la Sala de lo Constitucional en los autos de seguimiento de las once horas con doce minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete y el de las diez horas con once minutos del uno de diciembre de dos mil diecisiete en el proceso de amparo con referencia 713-2015; y (B) contravención al artículo 46 de la LJCA con relación al artículo 375 del CPCM, en virtud que la Cámara rechazó la prueba consistente en un peritaje judicial en materia archivística para determinar el carácter irrazonable de la petición de información objeto de controversia.

Esta Sala verifica que los anteriores motivos de impugnación, encajan en lo regulado por el artículo 510, numerales 3 y 4 del CPCM, relativos a que el presente recurso de apelación tendrá como finalidad revisar –respectivamente– el derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto de debate, y la prueba que no hubiere sido admitida en primera instancia. Por ello, en ese orden lógico, se procederá al análisis de la presente sentencia.

### III. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE ESTA SALA.

*A. Derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto de debate: contravención a los principios de legalidad y seguridad jurídica con relación al artículo 74 letra c) de la LPC por la incorrecta interpretación hecha por la Cámara del precedente emitido por la Sala de lo Constitucional en el proceso de amparo 713-2015.*

#### 1. Argumentos de la parte apelante.

La parte apelante acotó que, en el precedente emitido por la Sala de lo Constitucional antes descrito, el referido tribunal explicitó como una de las solicitudes de información irrazonables aquéllas cuya recopilación denotara razonablemente un interés deliberado en neutralizar u obstaculizar el desarrollo normal de las funciones de la institución a la que es requerida.

En ese sentido argumentó que, según sus estimaciones, el volumen de gestión de recopilación y entrega de la documentación requerida es aproximadamente de cien mil documentos. Por lo cual –alegó– además de irrazonable, de conformidad a los criterios emitidos por la Sala de lo Constitucional, la entrega de la información requerida era irrealizable en el plazo de treinta días hábiles que dispuso el acto administrativo impugnado en primera instancia.

Como primer yerro de la sentencia apelada en este recurso, señaló que el tribunal *a quo* interpretó el artículo 74 letra c) de la LAIP como causal de reserva de la información; mientras que la Sala de lo Constitucional las interpretó como causales de inadmisión de solicitudes de información. Por ello, aclaran que el MDN no se negó a tramitar la solicitud de información por tratarse de información reservada, sino por ser una solicitud *irrazonable*, en virtud del volumen de la información requerida.

Por otro lado, como segundo yerro de la sentencia objeto de impugnación, manifiesta que es incompleta la interpretación efectuada por la Cámara de la obligación de archivar información financiera, contemplada en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.

Lo anterior, a criterio de la parte recurrente, en virtud que el proceso de acceso a la información no sólo implica la producción de la documentación, sino también su gestión, sistematización y entrega, al crearse versiones públicas para resguardarse información *restringida*.

Alegan que el proceso antedicho implicaría un desvío importante de recursos de la institución, lo cual –señala– según el precedente emitido por la Sala de lo Constitucional, se

configuraría como una consideración esencial para la excepción al trámite de la solicitud de información.

En la audiencia, el apoderado del MDN, licenciado Víctor Enrique Amaya Chinchilla, expresó que nunca se controvertió que la información requerida fuese –o no– *relevante*. Al contrario, reconoce su relevancia, pero acota que la inadmisión en el trámite de dicha solicitud se fundamentó en que la entrega de la información era *irrazonable* puesto que implicaba un importante desvío de recursos para su procesamiento.

## 2. Argumentos de la parte apelada.

El licenciado René Francisco Valiente Araujo, apoderado del IAIP, manifestó en audiencia que no resulta aplicable al presente caso el precedente emitido por la Sala de lo Constitucional en el proceso de amparo 713-2015, alegando que la información requerida en la solicitud objeto de controversia, se encuentra dotada de relevancia e interés público.

Acotó que el mismo precedente en comento consideró que la información catalogada por la misma LAIP como oficiosa, deberá entenderse como información relevante. Y agregó que el artículo 10 de la LAIP establece qué vamos a entender por cada una de las categorías de información oficiosa y, entre ellas, se encuentran aspectos que tienen que ver con las contrataciones públicas, lo cual fue retomado por la Cámara, en el sentido que toda esta información referente a actos de contratación al amparo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública –en adelante, LACAP–, es información oficiosa en todas las instituciones.

A partir de lo anterior reafirmó que, en el caso bajo análisis, la información requerida se trata de información pública y relevante, al ser un mecanismo de contraloría ciudadana respecto a la utilización de fondos públicos por parte de una instancia del Estado.

Por otro lado, sobre la dificultad en procesar la información que el MDN considera vasta y amplia, el IAIP estima que tal afirmación supone un auto-reconocimiento de una conducta constitutiva de infracción a la LAIP, de conformidad al artículo 76 letra f), señalando que todas las instituciones [citando el artículo 41 de la LAIP] están obligadas al mantenimiento de un sistema de gestión documental y archivos que garanticen la ubicación, consulta y puesta a disposición al público de toda la información que produzcan en el ejercicio de sus funciones, inclusive, con la administración financiera.

En ese sentido expresó que el MDN al hacer tal afirmación, está aseverando implícitamente que ha incumplido los deberes de gestión documental y de archivos en cuanto a la conservación, catalogación y ordenación de estos documentos, cuya obligación no deriva únicamente de la LAIP, sino también se verifica en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y señaló que además la LACAP regula la generación de expedientes a esos procedimientos de contrataciones públicas.



Por ello afirmó que resulta inconcebible que no se tenga catalogada esa información que forma parte del ejercicio normal de las actividades de la institución.

Terminó precisando que, habiéndose determinado la relevancia de la información requerida, y considerando una posible proyección con la dificultad de procesar la misma [acotando que tal circunstancia no ha sido comprobada], la incapacidad o dificultad en su procesamiento no justifica su bloqueo ni la afectación al derecho constitucional al acceso a la información pública; agregando que, en todo caso resultaría válido alegar una dificultad en la entrega y necesidad de alargar el procedimiento o el plazo para entrega, pero ello no justifica la denegatoria absoluta del acceso a dicha información.

### 3. Argumentos de la representación del Fiscal General de la República

La licenciada Karla Mileny Rivas Morales, en su intervención en la audiencia, expuso que no hay similitud entre los hechos conocidos en el precedente de amparo citado por la parte apelante y los que originaron la resolución hoy apelada.

Explicó que en el proceso de amparo 713-2015 «... se conoció de una petición de información [sic] que se catalogó como manifestamente irrazonable, al determinarse que la misma poseía el interés deliberado de neutralizar el desarrollo normal de las funciones de la institución a la que es requerida». En el presente caso –acotó– y tal como lo fundamentó jurídicamente la Cámara y el IAIP, se trata de información que no únicamente conlleva el hecho de información oficiosa al tratarse del manejo de fondos públicos, sino que también es una obligación legal por parte del MDN de llevar una sistematización y comprobantes de esa información.

Por ello estimó que no se trata de una solicitud de información manifestamente irrazonable, puesto que la obligación de poseer archivada y organizada la información requerida, no sólo deviene de la LAIP, sino que también es parte de la obligación del estado de llevar una organización respecto al manejo de los fondos públicos. Por tanto, estimó que no existe razón alguna para obstaculizar la entrega, puesto que dicha información ya debería encontrarse sistematizada.

Concluyó así que, a su criterio, no existe la interpretación errada argüida por la parte apelante, puesto que los hechos y el tipo de información del presente caso no puede adecuarse a lo que se estaba conociendo en el precedente de amparo de la Sala de lo Constitucional.

Agregó que la compilación de la información requerida podría llevarle más tiempo por la cantidad de documentos, lo cual pudo haber motivado una respuesta diferente, pero el rechazo fue a través de una inadmisibilidad que no tiene sustento jurídico.

### 4. Consideraciones de la Sala

Debe precisarse que la información solicitada por el señor David Ernesto Pérez Domínguez [cuya declaratoria de improponibilidad al trámite de la misma por parte del oficial de información del MDN fue la que originó el acto administrativo impugnado en primera

instancia] fue: «Copias de todas las facturas y contratos por servicios de alimentación que el [MDN] compró desde enero de 2012 hasta septiembre de 2017. Detallar nombres de los proveedores de menús de servicios de alimentación. Copias de todas las facturas pagadas con fondos circulantes y caja chica del [MDN], desde enero de dos mil doce hasta septiembre de dos mil diecisiete» [folio 2 del expediente administrativo relacionado con el presente caso].

4.1. Sobre el primer yerro atribuido por la parte recurrente, se verifica que tanto el LAIP como la Cámara hicieron alusión al carácter de información relevante y oficiosa de lo requerido por el ciudadano David Ernesto Pérez Domínguez, puesto que esa fue la premisa para establecer la obligación legal de, no sólo poseer tal información, sino además proceder a la entrega de la misma.

Es imprescindible resaltar que el acceso a la información pública se ha reconocido como un derecho fundamental que, además, constituye una herramienta esencial para el control ciudadano de la gestión pública. Sobre esto, cabe citar lo apuntado por la Sala de lo Constitucional en materia de Presupuesto General de la Nación en el sentido que: «...en una sociedad democrática es deber del Estado garantizar la transparencia en la actuación de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones oficiales, así como la publicidad en la administración y destino de los recursos y fondos públicos. Este deber de transparencia está en íntima conexión de interdependencia con el derecho de acceso a la información de interés público. La transparencia y la rendición de cuentas presupuestarias son necesarias para prevenir, combatir y erradicar toda manifestación o forma de corrupción en el manejo y destino de todos los fondos públicos, y son imprescindibles para fortalecer el Estado Constitucional y Democrático de Derecho» [sentencia de inconstitucionalidad referencia 1-2010/27-2010/28-2010 de las catorce horas con quince minutos del día veinticinco de agosto de dos mil diez].

De lo anterior se extrae que el acceso a la información adquiere una especial relevancia de cara a verificar el destino y manejo de los fondos públicos, en ese sentido se encuentra vinculado con el deber de transparencia, constituyéndose así en un mecanismo para prevenir y erradicar cualquier forma de corrupción que debilite el actuar estatal.

Por otro lado, ante el carácter de derecho fundamental que posee el acceso a la información pública, la regla general que ha de aplicarse es el principio de máxima publicidad [artículo 4 letra a) de la LAIP], en virtud del cual se determina que la información en poder de los entes obligados [en principio] es pública, por lo cual su difusión debe ser irrestricta, con la salvedad de las excepciones establecidas por la ley.

Entre las categorías de información reguladas en la LAIP, interesa destacar la información oficiosa, la cual en los términos de la ley, es aquella que siempre debe encontrarse a disposición de los usuarios, sin necesidad que exista una solicitud de la misma [artículo 6 letra d) de la LAIP]. Pero lo anterior no significa que esa sea la única información que deba entregarse a los solicitantes.

De acuerdo al artículo 6 literal c) de la LAIP, la información pública es aquella *«...en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el registro de sus facultades o actividades (...) Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a cualquier título»*.

En esta línea, este Tribunal verifica que, en la resolución de seguimiento emitida por la Sala de lo Constitucional a las once horas con doce minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete en el proceso de amparo con referencia 713-2015 [precedente citado como incumplido por parte del MDN], se estableció que: *«...toda solicitud de información que comporte una alteración significativa en la agenda esencial de una institución pública o implique un importante desvío de recursos humanos y materiales para su producción, recopilación y sistematización y que, además, no se encuentre comprendida dentro de los datos que el art. 10 de la LAIP califica como de divulgación oficiosa, no deberá ser atendida por la institución receptora de la solicitud...»* (resaltado propio).

Asimismo, en dicha resolución de seguimiento, la Sala de lo Constitucional determinó además que *«...la información que cualquier ciudadano puede requerir a las entidades públicas es aquella que: haya sido generada por dichas instituciones en el contexto del ejercicio de sus funciones y cuya tenencia y sistematización se derive de un imperativo legal o constitucional...»*.

En esencia, la solicitud de información objeto de controversia en primera instancia se refiere a (i) contratos por servicios de alimentación que, según el artículo 10 numeral 19 de la LAIP, figura como información oficiosa al tratarse de contrataciones y adquisiciones efectuadas conforme a la LACAP; y (ii) facturas pagadas con fondos circulantes y caja chica que, de conformidad al artículo 6 letra c) de la LAIP [supra citado], se trata de información pública puesto que documenta el registro de las actividades del MDN y se trata de documentación relativa al manejo de fondos públicos y que además debe encontrarse ordenada y sistematizada, según el artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que se analizará en el siguiente numeral.

En la línea de lo dicho, cuando se realiza una solicitud de información catalogada por la LAIP como oficiosa o cuya tenencia y sistematización se derive de un mandato legal, en el supuesto que no se encuentre a disposición de los usuarios a través de los portales de acceso pertinentes; la petición siempre deberá ser atendida por los entes obligados, aun cuando su entrega o procesamiento implique un uso elevado de recursos humanos y materiales.

En ese sentido, no se advierte que la Cámara haya interpretado erróneamente el artículo 74 letra c) de la LAIP como causal de reserva de la información, puesto que, para poder establecer una causal de excepción para no dar trámite a las solicitudes de información debe verificarse, en los mismos términos expuestos por la Sala de lo Constitucional en el precedente



controversia, que justifico —a criterio de la parte apelante— declarar improponible dicha solicitud, se efectuará el análisis correspondiente en el siguiente apartado.

Así, esta Sala estima que, en la sentencia hoy apelada, la determinación por parte de la Cámara como información pública y oficiosa de lo solicitado por el ciudadano David Ernesto Pérez Domínguez, fue correcta y acorde al mismo precedente constitucional que se ha invocado como vulnerado. Por lo que se concluye que no resulta atendible el motivo de impugnación bajo análisis, en los concretos términos invocados por la parte apelante.

4.2 Sobre el alegato en la errónea interpretación de la Cámara al artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, se observa que dicha disposición fue utilizada por la Cámara para reforzar la obligación que tiene el MDN de contar con un registro ordenado de todos los documentos pertinentes a la actividad financiera de dicha entidad, entre ellos, los relativos a compras y contrataciones con fondos públicos.

En ese sentido, la obligación legal citada, aunada a la misma obligación contenida en otras disposiciones normativas [como en los artículos 6 literal c) y 40 al 44 de la LAIP y el artículo 12 literal h) de la LACAP, según lo invocado por la parte apelada] permite determinar que dicha información *debía de manera obligatoria —no potestativa—* encontrarse en el MDN a través de un sistema ordenado de gestión y archivo.

Por ello, el hecho de invocar que la sola producción de sus copias o versiones públicas implicaba un importante desvío de recursos humanos no justificaba la denegatoria de la solicitud objeto de controversia, al tratarse de información oficiosa y pública, cuya entrega y resguardo sistematizado deviene de mandatos legales.

En el precedente de la Sala de lo Constitucional, dicho Tribunal no determinó que la elaboración de las versiones públicas de la información requerida sea una de las acciones que impliquen un importante desvío de recursos humanos y materiales; sino que únicamente hizo alusión a que la producción, recopilación y sistematización de documentos, puede conllevar a un uso elevado de recursos humanos y materiales.

Es decir, se establece que las solicitudes de información pueden recaer en desvío de recursos, cuando los términos concretos de lo pedido sean tan puntualizados o específicos, pretendiendo que el ente obligado sea quien realice una filtración detallada de los datos cuando, basta que se pongan a disposición de los requirentes los documentos generales que contengan lo pedido, para que sean éstos quienes filtren a su interés la información oficiosa y pública, y ordenen a su conveniencia la información entregada.

Eso sí, en caso la forma ordinaria que ocupa el ente obligado para archivar y sistematizar la información, en cumplimiento a mandatos legales, le permitiera de manera fácil y expedita,



acceder a lo solicitado, tampoco habrá ningún reparo en entregar la información requerida según los mecanismos de búsqueda o filtros disponibles que tenga.

En el presente caso, el señor David Ernesto Pérez Domínguez requirió de forma genérica copias de contratos y facturas, sin que dicha solicitud involucrara datos específicos o se requiriera su entrega en un determinado orden o formato, que implicara una dificultad concreta para que el ente obligado procediera a su procesamiento [v.gr. que se entregaran un cuadro comparativo de precios de los insumos comprados año con año, según contrato; o un listado en orden alfabético por apellido de los representantes legales suscriptores de los contratos públicos, o solicitudes similares, que simplemente implique una manipulación detallada de datos según voluntad del peticionario, que bien podría filtrar éste, si el MDN le hubiese entregado de forma general la información obligatoria requerida]. Por tanto, para satisfacer la pretensión del solicitante, bastaba la mera entrega de los documentos, que en caso de contener información reservada o confidencial, debían entregarse en sus versiones públicas según el artículo 30 de la LAIP.

Por ello, se reitera que, según lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, artículos 40 al 44 de la LAIP y el artículo 12 literal h) de la LACAP, el MDN ya debería tener producida, recopilada y sistematizada la información relativa a compras y contrataciones públicas. El hecho de invocar una dificultad para la entrega de la documentación requerida, denota un incumplimiento a los mandatos legales citados; es decir, refleja que el MDN no ha cumplido con su deber legal de resguardar de forma organizada y sistematizada los documentos concernientes a compras y contrataciones públicas.

En consecuencia no existe justificación válida para denegar la información, valiéndose de una supuesta dificultad en la producción, recopilación y sistematización de la información solicitada por el señor David Ernesto Pérez Domínguez.

Ya que, si bien la elaboración de versiones públicas sobre información que obra en las facturas, de acuerdo al volumen de la información requerida, puede suponer una necesidad adicional de tiempo y/o recursos materiales y humanos, tal circunstancia únicamente justifica una modificación en el plazo de entrega de la misma; más no es constitutiva de una “irrazonabilidad” para tramitar tal solicitud de información y declarar su inadmisibilidad o improponibilidad, en los términos del artículo 74 letra c) de la LAIP y de lo expuesto por el auto de ejecución de sentencia en el proceso de amparo 713-2015, en las resoluciones de seguimiento citados por la parte apelante.

En consecuencia, tampoco resulta atendible el motivo de impugnación bajo análisis, en los concretos términos invocados por la parte apelante.

***B. Prueba que no fue admitida en primera instancia: contravención al artículo 46 de la LJCA con relación al artículo 375 del CPCM, en virtud que la Cámara inadmitió prueba***

*consistente en un peritaje judicial en materia archivística para determinar el carácter irrazonable de la petición de información objeto de controversia.*

1. Argumentos de la parte apelante.

El MDN señaló que, en primera instancia, se solicitó la realización de un peritaje judicial en materia archivística, a efecto de establecer los siguientes elementos técnicos: (i) la cantidad de información, en término de documentos y folios, que tendría que ser localizada, sistematizada y, eventualmente, puesta a disposición del solicitante de parte de este MDN; (ii) el costo en términos de personal de trabajo y económico que tendría que sufragar este Ministerio para cumplir con la orden administrativa emitida por la autoridad demandada de entrega de la información; (iii) si el solicitante tiene la capacidad de procesar la gran cantidad de información que eventualmente sería entregada por este Ministerio, de cumplirse con la orden administrativa emitida por la autoridad demandada.

Manifestó que tal diligencia probatoria era idónea, útil y relevante a efecto de comprobar el presupuesto esencial del abuso del ejercicio del derecho de acceso a la información y la irrazonabilidad de la solicitud de información por implicar un importante desvío de recursos humanos y materiales para su producción, recopilación, sistematización y entrega de la documentación.

En la resolución apelada, la Cámara la rechazó al no considerarla pertinente, ni útil para el caso, estimando que lo que se pretendía probar no eran conocimientos técnicos que debía establecer un perito.

En el recurso, la parte apelante invocó que la denegatoria de la diligencia probatoria en comento fue ilegal, puesto que, de conformidad al artículo 375 del CPCM, sí se podían acreditar mediante perito los elementos antes descritos, al ser la archivística una ciencia que requiere un conocimiento técnico especializado.

En audiencia, el licenciado Víctor Enrique Amaya Chinchilla, apoderado del MDN, precisó que el archivista es un gestor de documentos que puede determinar el costo que supondría la entrega de la información requerida. En ese sentido, acotó que, al denegarse la práctica del peritaje propuesto, no se le permitió probar el carácter irrazonable de la solicitud de información objeto de controversia, al no haber podido acreditar la dificultad en su entrega.

2. Argumento de la parte apelada.

El licenciado René Francisco Valiente Araujo, apoderado del IAIP, expuso en audiencia que, a su criterio fue acertado el rechazo por parte de la Cámara del peritaje de naturaleza archivística requerido por el MDN. Lo anterior, al estimar que el archivo y resguardo de la información sobre la que se requería dicha prueba ya se encuentran regulados en un amplio espectro de disposiciones normativas de distinta naturaleza, que dejan clara la obligación tanto de producción, como de organización y catalogación de la información que ha sido producida

en el ejercicio de las funciones estatales en el manejo de fondos públicos y contrataciones públicas.

En ese sentido, acotó que el hecho de requerir la realización de un peritaje de naturaleza archivística para demostrar las dificultades que pudiera generar la búsqueda de esa información, releva un profundo desconocimiento de la naturaleza de la función archivística. Alegando que no es un archivista profesional el que dirá qué tan difícil es tramitar una solicitud de información pública, puesto que la función del archivista en sí es catalogar, ordenar y conservar los documentos que se encuentran en poder de las instituciones; circunstancias que –según reitera el IAIP– ya debía encontrarse solventada en virtud de las obligaciones legales antes citadas.

Concluye afirmando que el MDN no puede beneficiarse del propio incumplimiento de normas que le son imperativas para denegar o afectar derechos de particulares que han requerido información que se genera de las actividades básicas de esa cartera del Estado.

### 3. Argumentos de la representación del Fiscal General de la República

La licenciada Karla Mileny Rivas Morales precisó en audiencia que un dictamen pericial permite establecer juicios de valor; por ejemplo –señaló– mediante una prueba pericial pudo haberse comprobado que el sistema de sistematización del MDN era el idóneo y aun así se dificultaba proporcionarle la información al ciudadano. Sin embargo, acotó que, de acuerdo a lo planteado en primera instancia, lo que se pretendía acreditar eran hechos: cantidad de información, números de folios, entre otros. Por ello, expuso que las anteriores circunstancias no se podían determinar mediante el elemento probatorio propuesto, sino que podría haber existido otro tipo de medios para poder probar lo que se pretendía acreditar.

En ese sentido concluyó que no fue errado el rechazo de la prueba pericial en primera instancia, siendo que no es válido el motivo de impugnación antes dicho y estimó que debe confirmarse la resolución apelada.

### 4. Consideraciones de la Sala

Ya ha quedado determinado que la información solicitada, relativa a compras y contrataciones públicas, por mandato legal debía encontrarse de forma organizada, sistematizada y recopilada en el archivo –físico o digital– del MDN.

En ese sentido, era irrelevante acreditar, mediante un peritaje archivístico, cuál era la cantidad de documentos, o ni si era posible la entrega de la misma por parte del MDN, puesto que, se reitera, dicha información debe entregarse al solicitante al tratarse de información oficiosa, independientemente si sea un gran volumen de documentos o un alto costo de recursos materiales y humanos, en atención al principio de máxima publicidad y transparencia.

Es decir, el carácter “irrazonable” o de “importante desvío de recursos”, según lo alegado por el MDN, ya ha quedado determinado que es producto de su incumplimiento a los mandatos legales relativos a resguardar de forma ordenada y sistematizada la documentación concerniente a compras y contrataciones públicas.



Por ello, no era necesario acreditarlo mediante un peritaje archivístico; puesto que la información requerida, al guardar relación con compras y contrataciones públicas, ya debía encontrarse archivada y sistematizada en los registros de la referida institución y cualquier dificultad en su entrega [como la elaboración de versiones públicas, según lo invocado por el apoderado de la parte apelante], únicamente justifica una extensión en el plazo de entrega, más no el rechazo a tramitar la solicitud de información en comento, tal como ya se ha referido supra.

En consecuencia, esta Sala colige que el rechazo del referido medio probatorio fue procedente; por ello no resulta atendible el motivo de impugnación bajo análisis.

**IV. POR TANTO**, con fundamento en las consideraciones realizadas, disposiciones normativas citadas y los artículos 112, 113, 114, 115 y 117 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 515 inciso 2° del Código Procesal Civil y Mercantil, a nombre de la República esta Sala **FALLA**:

1. Confirmar la sentencia venida en apelación, pronunciada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo con residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad, a las ocho horas con veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en el proceso contencioso administrativo clasificado con la referencia interna 37-PC-07-2018 (NUE 00068-18-ST-COPC-CAM), por medio de la cual falló **DESESTIMAR** la pretensión planteada por el Ministerio de la Defensa Nacional contra el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública, debido a no haberse comprobado los motivos de ilegalidad alegados en primera instancia respecto al acto administrativo impugnado consistente en la resolución emitida por el IAIIP a las diez horas con treinta y seis minutos del diez de abril de dos mil dieciocho, en el procedimiento administrativo con referencia 324-A-2017.

2. Condenar en costas a la parte apelante.

3. Remitir el proceso venido en apelación a la Cámara de lo Contencioso Administrativo con residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad, con las certificaciones de ley, junto con la documentación que se describe en la hoja de recepción suscrita por la secretaria de esta Sala, a folio 2 del expediente judicial.

Notifíquese. -

PRONUNCIADA POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS Y LOS SEÑORES  
MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN.